

ALFREDO MOLANO

# Desterrados

*En Colombia, un millón de desplazados está atrapado por una política de expulsiones que se remonta a varios siglos atrás. Casi nunca vuelven a sus casas.*

El desplazamiento de población en Colombia ha querido ser visto por el *establishment* como un fenómeno físico. Un cuerpo —en este caso una población— cambia de sitio; en el mejor de los casos es un hecho geográfico: cambia su lugar de residencia. La mera voz “desplazados” denuncia la tentativa de ocultar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se “desplaza”, la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse. En este artículo se quiere llamar las cosas por su nombre, y además, hacerlo desde una perspectiva histórica. Porque otro manido recurso para escamotear el hecho, es verlo como si se tratara del resultado de los enfrentamientos entre dos actores recientes de la violencia: la guerrilla y los paramilitares. Se olvida que la expulsión de pueblos y de ciudadanos es un antiguo recurso del sistema y que al situar el origen del problema en los grupos armados ilegales, se exculpa al régimen y, en particular, a las Fuerzas Armadas, de toda responsabilidad.

## Una mirada hacia atrás

Eric Hosbawm afirma que la historia de Colombia puede interpretarse basándose en la recurrencia de dos hechos: la colonización permanente y la violencia incesante. No es necesario remontarse a la Conquista de América, realizada a sangre y fuego, ni a la época del poblamiento colonial para constatar la observación del profesor. Pero es durante el siglo XIX cuando esas constantes comienzan a perfilarse con mayor nitidez.

La lucha por la independencia de España fue una guerra civil que condujo a una secesión relativamente fácil, gracias a las distancias geográficas y al papel de Inglaterra. Durante el resto del siglo hubo en Colombia 52 guerras civiles y más elecciones que en ningún otro país hispanoamericano. La guerra civil fue un verdadero deporte de las clases dominantes. En el trasfondo había, ciertamente, un conflicto entre proteccionismo y librecambio, que se expresaba ideológicamente en tendencias políticas —conservadurismo y liberalismo— pero en la práctica la pendencia versaba sobre el control de las palancas del poder político como herramienta de acumulación de riqueza.

Las guerras civiles, que tenían como objeto el control del incipiente Estado, eran en realidad grandes operaciones de expropiación del contrario y de apropiación

Alfredo Molano es columnista en *El Espectador* y autor de numerosos relatos sobre la violencia en Colombia.

*Se sabe que en los últimos cinco años el desplazamiento se ha incrementado año tras año*

ción de la mano de obra. Primero se reclutaba a la fuerza a los peones y aparceros de las haciendas —todo gran hacendado era General— y luego, si se triunfaba, los peones de los perdedores pasaban a trabajar en las haciendas del ganador. Estos procedimientos bélicos suponían grandes desplazamientos económicos y demográficos. A decir del ex presidente Alfonso López Michelsen —agudo observador de nuestra historia— las guerras civiles contribuyeron a formar una conciencia nacional y territorial a partir de los conflictos domésticos. Las guerras civiles suponían despoblamientos, pero también repoblamientos, movimientos ambos que expresaban el pulso político de las diferencias de los sectores dominantes. Tanto el desplazamiento de campesinos como su adscripción a las haciendas se ejercía mediante la coerción extra económica, es decir mediante el uso —o amenaza— de la fuerza.

La violencia de los años cincuenta fue, bien vistas las cosas, un proceso de “desplazamiento” acelerado e intenso. Son innumerables los testimonios de este proceso y hay una abundante literatura sobre los hechos. Paul Oquist reporta que 200.000 personas cayeron víctimas del sectarismo y de la represión oficial, cerca de 400.000 parcelas fueron abandonadas y 2 millones de colombianos dejaron sus tierras. Son bien conocidos los casos del Valle, del Tolima y del Cauca, donde tierras que antes de la violencia eran campesinas, terminaron en manos de hacendados y empresarios. Los pequeños pueblos y muchas ciudades —sobre todo en la zona cafetera— crecieron notablemente, y en 1964 eran ya grandes ciudades. Entre 1938 y 1964 Colombia dejó de ser predominantemente rural para ser un país en acelerado proceso de urbanización, sin que hubiera cambios económicos drásticos ni en el campo ni en las ciudades. La industrialización —excepción hecha del período pre violencia— no mostró ritmos altos para explicar la migración hacia las ciudades. Habría por tanto que concluir que el mecanismo de estos cambios demográficos se originó políticamente y que su herramienta fue la violencia.

## **Desplazamientos recientes**

Toda esta historia parece repetirse hoy, potenciada. Entre 1985 y 1996, según el reciente estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), han sido desplazados 850.000 colombianos, de los cuales casi 200.000 en el último año. Se sabe que en los últimos cinco años el desplazamiento se ha incrementado año tras año, por tanto, si tomamos como base el promedio de los dos últimos períodos, para el año 2000 podría haber más de un millón. Es de todas maneras sorprendente que el Estado no haya realizado un censo de los habitantes en esta desgraciada condición.

Aproximadamente el 50% de los desplazados llegan a las ciudades desde dos de las regiones donde el paramilitarismo se ha hecho fuerte: Urabá y el Magdalena Medio. La primera es una zona bananera donde las empresas comercializadoras de fruta y las compañías agropecuarias tienen grandes inversiones, pero es también una zona donde están previstos dos macroproyectos: el tramo que falta por hacer de la carretera Panamericana, que comunicará a la Tierra del Fuego con Alaska, y un canal interoceánico que una las aguas de los ríos Atrato y Truan-

dó, es decir un nuevo canal que comunique los océanos Atlántico y Pacífico. Se sabe que la frontera con Panamá es un corredor de contrabando importante por donde sale cocaína y entran armas. El Magdalena Medio es un centro vital de comunicaciones terrestres y de producción, transporte de petróleo y gas. La mayoría del crudo exportado pasa por allí y la mayoría de los refinados se hacen en Barrancabermeja, donde a su vez tiene sede el sindicato más fuerte del país. Es una zona de extensas ganaderías y de plantaciones enormes de palma africana. Los intereses de las compañías extranjeras y los de los gobiernos y del sector privado, convergen geográficamente en estos dos espacios como quizás en ninguna otra parte del territorio nacional.

Los desplazados huyen hacia las ciudades y principalmente hacia Bogotá. Parecería como si la gente buscara los sitios más alejados respecto a su lugar de origen, donde su anonimato fuera mayor. El miedo salta a la vista. Solo un 8% sigue viviendo en áreas rurales. El 35% acusa a los paramilitares del desplazamiento, el 15% lo hacen atribuyendo la razón de su expulsión a la fuerza pública, a la guerrilla la señalan responsable un 28%. La guerra, pero sobre todo la estrategia de despoblamiento como recurso militar, es evidente. El 50% de los desplazados lo son por causa de amenazas y un 15% por los asesinatos. El terror y el miedo son la herramienta del mecanismo. La lógica del aforismo de las guerras romanas se invierte: despoblar para gobernar. El 45% de la población es mayor de 18 años, pero hay un 33% de niños menores de 10 años. La mitad de los desplazados tenían alguna forma de organización comunitaria en su lugar de origen. El río Atrato y el Magdalena Medio, los sindicatos y la iglesia tienen una larga tradición organizativa y no hay duda de que destruir esos lazos es uno de los objetivos principales de las acciones de los paramilitares. Sorprende que el 40% de la gente no haya recibido atención de ninguna clase. La gran mayoría de desplazados son campesinos con ingresos muy bajos, casi sin educación primaria, y llegan buscando ante todo vivienda y trabajo. Quieren reinsertarse como asalariados o mediante la organización de una microempresa. El grado de confianza en el Estado es tan bajo que sólo un 17% quiere retornar a su tierra. Estas cifras, aunque contribuyen a describir un aspecto del drama, son insuficientes para explicar el proceso.

En años pasados la mayor fuerza que desplazaba campesinos era el ejército y la policía. La estrategia consistía en obligarlos a huir para poder atacar más fácilmente a la guerrilla, debido a la ayuda que prestaban a los alzados y que consistía básicamente en información y alimentación. La guerrilla por su lado reemplazaba al Estado en algunos servicios elementales como salud, educación y arbitraje de conflictos. El desplazamiento se hacía a partir del hecho de que aparecían muertos algunos líderes, otros desaparecían, y no pocos eran cogidos presos y torturados. Una manera brutal y regular fue también el bombardeo aéreo indiscriminado. Eran procedimientos habituales sobre los que hay un sinnúmero de testimonios. En algunas partes se apeló a la táctica usada por EE UU en Vietnam, consistente en reunir a la gente en aldeas estratégicas a las que sólo podían entrar o salir de manera controlada. El resto del área era considerada tierra de nadie y, frecuentemente arrasada.

La guerrilla, por su parte, hacía operativos de "limpieza" para expulsar informantes del Estado o personas que les eran desleales. Los casos se multiplicaban

a medida que la fuerza pública intensificaba sus acciones de inteligencia militar y de infiltración. Muchos fusilamientos y expulsiones se podrían sumar como producto de estas medidas, y no pocas veces se hacían —y se hacen— sobre bases muy endebles o absolutamente injustificadas. Se daba también el caso de usar la autoridad guerrillera para saldar conflictos personales de un comandante o de un subversivo. Estas conductas no han cesado y se ha hecho muy poco por corregirlas.

Con el desarrollo del paramilitarismo, llamémoslo orgánico, el desplazamiento de población se ha convertido en una estrategia militar recurrente. Los campesinos son considerados por la guerrilla como la condición de su existencia militar y su movilización como su objetivo político. Mao Tse-Tung lo consideraba el agua del pez. Los enemigos de la guerrilla toman al pie de la letra la sentencia y proceden en consecuencia; es decir, tratan de sacar el agua de la pecera y de asfixiar a los insurrectos. La táctica es tan sencilla como brutal: asesinan delante de la comunidad a los líderes más estimados, a sus cabezas visibles, usualmente de manera brutal para ejemplarizar, queman varias casas, asaltan otras y amenazan con regresar a matar a todos los que —según ellos— apoyan a la guerrilla. Así han sido asesinados líderes sindicales, maestros de escuela, médicos y enfermeras, curas y alcaldes, miembros directivos de las juntas de acción comunal y parientes de los guerrilleros y claro, todos aquellos considerados por los mandos paramilitares como colaboradores activos o potenciales de la guerrilla. El objetivo es cortar los vínculos entre los rebeldes y las comunidades. En realidad lo logran porque la gente queda paralizada y huye. El terror trae múltiples consecuencias de orden social. La más importante es el derrumbe de los vínculos sociales de solidaridad y mutua cooperación basados en el vecinazgo, los lazos familiares, las afinidades ocupacionales o las simpatías ideológicas. Es un objetivo manifiesto del paramilitarismo destrozando estas redes porque saben que son la fuerza social que permite la protesta y la denuncia. La gente comienza a desconfiar, se acusan unos a otros, se señalan como culpables. La vida en comunidad se vuelve un infierno. El efecto más evidente de la ruptura de los lazos comunales es la explosión de la familia extensa, primero, y de la familia nuclear después. La desconfianza y el miedo son tales que la vida en común se hace imposible. Cada cual se siente seguro solamente cuando está solo. Las consecuencias psíquicas de tales destrozos están por estudiar.

Los paramilitares, que se hacen llamar Autodefensas Campesinas, quieren precisamente impedir toda forma de defensa de los campesinos. Saben que en la solidaridad reside su fuerza y actúan para destrozarla. La justificación es la colaboración con la guerrilla, con el comunismo internacional o incluso con el narcotráfico. Es la protesta, la insubordinación y la rebeldía lo que buscan liquidar y por esa razón encuentran tanta acogida entre los grandes propietarios, los ganaderos, los comerciantes, las compañías extranjeras y los políticos. Cierto es que este sector social se defiende de la extorsión y el secuestro atacando a las bases de las guerrillas como una manera de debilitarlas y de obligarlas a salir de las regiones, pero no es menos cierto que, dado que los paramilitares están en parte apoyados económica y políticamente por ese sector, sus acciones deben redundar en beneficio de los intereses inmediatos de los financiadores. La guerrilla también

puede darles seguridad liquidando abigeos, ladrones, malandrines y viciosos que de una manera u otra asolan a las regiones y ponen en peligro los bienes. Estas funciones son reconocidas económicamente por los patrones; pero, la guerrilla lo que no hace es impedir la protesta social, la lucha sindical, la demanda por mejores ingresos y mayor calidad de vida, lo que en cambio hacen los paramilitares de manera regular y a destajo. Los paramilitares ejecutan con saña a los líderes de la inconformidad, definen niveles de salarios y formas de contratación de mano de obra, precios de compra de los productos campesinos y, obviamente, en todo litigio fallan a favor de los hacendados. Un rico empresario de la zona bananera me confesó que los paramilitares eran superiores a la guerrilla sólo porque le obedecían. Este es el secreto del vínculo entre paramilitares y *establishment*. El paramilitarismo representa a un sector que se ha alzado en armas contra la Constitución Nacional. No es por tanto un grupo rebelde contra el *establishment*, sino contra las leyes que lo han regido.

El Ejército reacciona airadamente cuando se habla de paramilitares, por razones evidentes. Tampoco les agrada que los llamen Autodefensas porque de alguna manera implica una acusación de inoperancia de la fuerza pública. Gustan de llamarlos Justicia Privada, en contraste con la Justicia Pública que para ellos es inoperante, parcializada y corrompida. Intentan justificar al paramilitarismo presentándolo como una reacción a la ineficacia de los jueces y asumiendo que lo que aplican es Justicia. El viejo principio de los conservadores de los años cincuenta, el derecho a la legítima defensa, vuelve por sus fueros. En la realidad los criterios de recta justicia que aplican están dictados por sus financiadores y es evidente que se trata de una defensa a ultranza de los intereses de las clases superiores. Lo que no se explica es por qué la fuerza pública es tan ineficaz en la reducción y control de la guerrilla.

El desplazamiento de campesinos tiene otra razón, además de las razones militares y económicas ya señaladas. Es la apropiación de tierras. Se dan dos casos. El primero es llamado "TRASVASE". Los paramilitares desocupan una región y a renglón seguido traen campesinos fieles a su causa y les permiten adueñarse de los bienes y enseres dejados por los expulsados. Como antaño, los servicios de guerra se pagan con tierra, tal como sucedía en la España de la Reconquista sucedía con las tierras dejadas por los moros, ocupadas por vasallos castellanos. Se aseguran así las retaguardias, y no es excepcional el caso de que se hagan pequeños remedos de reforma agraria. El otro caso es el de la apropiación de tierras campesinas por parte de los terratenientes que han financiado las operaciones paramilitares. Es la modalidad más frecuente, sobre todo cuando las tierras son de buena calidad o bien situadas; o cuando se proyecta una obra que valorizará la propiedad rural. De ahí que en muchos casos el desplazamiento debe ser entendido como una forma de apropiación latifundista de tierras. Se puede añadir otro caso distinto de funcionalidad del desplazamiento, que en parte es una combinación de los anteriores, pero que está invariablemente vinculado a los grandes proyectos hidroeléctricos o viales: la limpieza de zonas para evitar reclamos, alzamientos y protestas de los afectados y al mismo tiempo brindar seguridad a los intereses que intervienen en la obra.

La relación con el narcotráfico ha sido puesta en evidencia por las autoridades

*Como antaño,  
los servicios  
de guerra se  
pagan con  
tierra*

más respetadas y dignas de crédito. Hay que tener en cuenta que los narcotraficantes son propietarios legítimos de más de 5 millones de hectáreas de tierras de la mejor calidad y mejor ubicación. Es uno de los productos de sus actividades ilícitas y criminales. Puede decirse que estas tierras son la “alcancía” del narcotráfico, el capital que han puesto bajo la protección del sagrado derecho a la propiedad. Dado que la ley colombiana está obligada a perseguirlos y dado que la guerrilla por sus banderas agraristas es enemiga jurada de la gran propiedad, los narcotraficantes sólo pueden defenderse por medio de los paramilitares. Cuentan desde luego con la impunidad, o mejor, con la tolerancia institucional del Ejército, sombrilla bajo la cual sus intereses quedan a salvo. Más aún, los paramilitares son un conducto a través del cual el narcotráfico logra corromper a la fuerza pública y, de alguna manera también, ponerla a su servicio. Este es otro motivo por el que el fortalecimiento del paramilitarismo es la causa directa de gran parte del cruel y creciente proceso de expulsión masiva de población.

La ausencia de una política de sometimiento del paramilitarismo equivale a la más vergonzosa impunidad. A esta modalidad de convivencia corresponde, en el plano de la expulsión, una política de legitimación del desplazamiento al formular programas que intentan poner remedio al problema, pero sin afrontar las causas que lo originan. El Estado colombiano se ha propuesto programas asistenciales en lugar de políticas de reversión y control del proceso del desplazamiento, que dé a sus víctimas garantías para retornar, recuperar sus tierras y trabajarlas.